

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos de especialista obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Tal y como indica el artículo 1 del Proyecto sometido a informe su objeto consiste en la regulación de las condiciones para que los títulos de especialista concedidos en Estados no miembros de la Unión Europea produzcan los mismos efectos que los obtenidos en España, estableciéndose a tal efectos un procedimiento, iniciado en todo caso a instancia del interesado, en el que será fundamental la intervención del Comité de Expertos, dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social, al que se refiere el artículo 5 del Proyecto.

Dicho Comité actuará en las tres fases establecidas del procedimiento, valorando en primer lugar los requisitos exigibles para la obtención de la titulación, analizando posteriormente la documentación aportada por el propio solicitante e incluida en el expediente, a fin de determinar, según el artículo 9 si la validación ha de quedar condicionada, en su caso, “a la evaluación de un período de ejercicio profesional” o “a la evaluación de un período complementario de formación en la correspondiente especialidad” y verificando finalmente la evaluación resultante de los períodos a los que se ha hecho referencia.

Dicho períodos se desarrollarán en un centro integrado en el Sistema Nacional de Salud o concertado con él o en un centro privado que cuente con una unidad asistencial de la correspondiente especialidad, tal y como se establece expresamente en el artículo 11.2 para el ejercicio profesional en prácticas y del artículo 12.2 para la formación complementaria. En el primer caso, el interesado suscribirá con el centro un contrato laboral por obra o servicio determinado, en su condición de trabajador del centro, mientras que en el segundo el interesado tendrá la consideración de personal en formación sin vinculación laboral entre el centro y aquél.

En esta fase, se elaborará, según dispone el artículo 13, un informe por el supervisor que concluirá con la propuesta positiva o negativa de evaluación global, del que se dará traslado a la correspondiente Comunidad Autónoma, a fin de que por la misma se dé igualmente traslado al Ministerio de Sanidad y Política Social.

En caso de reconocimiento de la titulación, el artículo 16 dispone que de conformidad con el artículo 32.2 de la Ley 44/2003, las credenciales otorgadas al profesional, a las que se refiere el artículo 15, “se trasladarán al Registro Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud, adscrito a la Dirección General de Universidades del Ministerio e Ciencia e Innovación.

La tramitación del procedimiento implicará el tratamiento de los datos del solicitante por parte de los distintos órganos del Ministerio de sanidad y Política Social, tanto por parte de la Subdirección General de Ordenación Profesional como por el Comité de Expertos, así como su cesión a la Comunidad Autónoma en que preste los servicios de prácticas o formación el interesado y en definitiva al propio centro sanitario en el cual se desarrolle la actividad. Igualmente, los datos se cederán para su inscripción en el Registro Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud, lo que implicará además el sometimiento al régimen de publicidad de dicho Registro y la consiguiente comunicación pública de los datos incluidos en el mismo en los términos legalmente establecidos.

Todos estos tratamientos y cesiones de datos deberán resultar respetuosos con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, cuyo artículo 6.1 establece, como principio general, que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”, si bien según el artículo 6.2 “no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal (...) se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.

Del mismo modo, en cuanto a las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, aunque no será preciso el consentimiento para la cesión cuando la misma esté autorizada en una Ley (artículo 11.2 a) o “cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”, si bien “en este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique” (artículo 11.2 c).

A fin de dar cumplimiento a estas previsiones, el formulario de solicitud incluido en el Anexo I del Proyecto se remite al apartado 1.4 de sus

instrucciones para hacer referencia a la política de protección de datos. Dichas instrucciones incluyen en sus últimos párrafos, y no en el citado apartado, una cláusula de protección de datos en que se informa al interesado de que “los datos personales que figuren en la solicitud serán tratados con el único fin de poder gestionarlos adecuadamente”, haciéndose igualmente referencia al régimen del registro Nacional previsto en el artículo 32.2 de la Ley 44/2003. Igualmente se señala el lugar en el que será posible el ejercicio de los derechos y se añade que “a través de la presentación de la solicitud se entenderá que el interesado está dando su consentimiento expreso para la cesión de datos en los términos indicados. A tal efecto, la presentación de la solicitud implica el expreso consentimiento para la cesión de los datos en los términos expresados en el párrafo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1 de la citada Ley Orgánica 15/1999”. En consecuencia, el Proyecto opta por una fórmula de consentimiento expreso para las cesiones de datos, si bien en ningún momento se especifican las mismas.

Dicho esto, y entrando a analizar los tratamientos y cesiones objeto de regulación, el tratamiento de los datos por parte de los órganos integrados en el Ministerio de Sanidad y Política Social se encontraría fundado en la propia solicitud formulada por el interesado mediante la cual se solicita el reconocimiento de los efectos profesionales de su título, obtenido en un Estado no miembro de la Unión Europea, por lo que es la propia voluntad del interesado la que implica el tratamiento de sus datos de carácter personal.

Del mismo modo, la comunicación de los datos al centro en que se desarrollen las actividades de prácticas y formación constituye un requisito necesario para la obtención de la acreditación solicitada, de tal modo que es posible considerar que la comunicación de datos a dicho centro, y a la Comunidad Autónoma en cuyo sistema sanitario se integre aquél, de la información concerniente al solicitante se encuentra amparada por el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, sin que sea necesario, a diferencia de lo que se desprende de la cláusula incluida en el Proyecto, la obtención del consentimiento del interesado para que dicha cesión pudiera tener lugar.

Podría considerarse que la solicitud del consentimiento del interesado no hace sino reforzar la licitud del tratamiento de los datos llevado a cabo por los destinatarios y de la cesión de los datos efectuada por el Ministerio de Sanidad y Política Social. Sin embargo, debe recordarse que el régimen previsto para el tratamiento de los datos según el mismo se legitime en el consentimiento del interesado o en la existencia de una relación jurídica cuyo desarrollo impone dicha cesión difiere, al menos, en el hecho de la revocabilidad del consentimiento prestado, puesto que si bien el consentimiento es revocable por el afectado, en caso de que la cesión sea precisa para el desarrollo de la relación jurídica no tiene tal carácter a menos que se resuelva dicha relación.

En este caso, el interesado no podrá revocar el consentimiento supuestamente prestado para la comunicación de sus datos a menos que

resuelva retirar la solicitud formulada, lo que no hace sino poner de manifiesto que dicho consentimiento no puede exigirse en este supuesto, dado que la cesión es consecuencia de la solicitud formulada, medie o no un consentimiento adicional del afectado.

En cuanto a la publicación prevista en la Ley 44/2003, su artículo 32.2 dispone en su párrafo primero que “en el Registro Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud se inscribirán todos los profesionales que obtengan un título de especialista, así como a quienes vean homologado o reconocido un título obtenido en el extranjero”, disponiendo el último párrafo de dicho precepto que “los indicados registros tendrán carácter público en lo relativo a la identidad de los interesados, al título o diploma que ostentan y a las fechas de su obtención, reconocimiento u homologación”.

Además, según el artículo 32.4 “los registros a los que se refiere este artículo se gestionarán por el Ministerio de Sanidad y Consumo, salvo el previsto en el primer párrafo del apartado 2, que se gestionará por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se integrarán en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, que hará públicos los datos agregados e integrados de los mismos, así como los que resulten de su tratamiento estadístico, de acuerdo con los principios generales que se establezcan por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.

En consecuencia, la inscripción en el Registro es consecuencia directa de la obtención del título de especialista, viniendo impuesta por el precepto citado, que igualmente dispone un régimen de publicidad del mismo en la extensión fijada en el último párrafo del artículo 32.2 de la Ley 44/2003. Por todo ello, la cesión de los datos al Registro y su publicidad se encontrarán amparadas por los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en relación con el precepto citado, no siendo tampoco precisa la obtención del consentimiento del afectado.

Todo lo que se ha venido indicando afecta sustancialmente a la cláusula contenida en el Anexo I del Proyecto, que deberá ser modificada, a fin de ajustar su contenido a lo que ha venido indicándose.

Además, debe señalarse que el artículo 5.1 a) de la Ley Orgánica 15/1999 impone la obligación de informar al interesado acerca de “la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información”, lo que no se hace efectivo a través de la cláusula indicada, dado que la misma no se refiere al fichero al que se incorporarán los datos ni a las cesiones de datos que realmente serán llevadas a cabo, lo que resulta preciso a fin de delimitar los cesionarios de los datos. En este sentido, debe recordarse que si bien la cláusula solicita un consentimiento del interesado para la cesión de sus datos se remite al “párrafo anterior” relativo al ejercicio de los derechos del interesado, siendo así que tampoco el primer párrafo de la cláusula específica

en modo alguno las cesiones de datos que se llevarán a cabo, salvo las que traen su causa del artículo 32.2 de la Ley 44/2003.

Por tanto, sería preciso informar al interesado de los siguientes aspectos, actualmente no incluidos en la cláusula informativa:

- De la existencia de un fichero al que se incorporarán los datos de la solicitud.
- De las cesiones de sus datos que se produzcan, en su caso, a los centros en que se lleve a cabo la actividad de prácticas o formación y a las Comunidades Autónomas en cuyo sistema sanitario se integren dichos centros.
- En relación con dicha cesión, debería suprimirse el párrafo tercero de la cláusula, en cuanto que lo que deberá hacerse en la misma es informar de forma clara y detallada de las cesiones de datos y no recabar el consentimiento del interesado en los términos a los que se ha hecho referencia con anterioridad.
- Además, conforme a la letra c) del artículo 5.1 de la Ley 15/1999, deberá informarse al interesado de las consecuencias de no aportar los datos que el propio formulario exige con carácter obligatorio.